

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Manuel A. Diaz contra el jefe político del centro que le impuso quince días de obras públicas, alegando el quejoso que con este procedimiento ha habido violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El fiscal dice: El C. Manuel Diaz fué condenado, segun se informa, por escándalo público, y por faltas de respeto á la autoridad política del partido, á quince días de obras públicas por las prescripciones del artículo 20 de la ley del Estado de 13 de Noviembre de 1852.

Dado caso de que estuvieran justificadas las dos causales, y que debieran corregirse al tenor de la ley citada, esta no puede ser aplicada con manifiesta infraccion de la Constitucion de 1857, pues no solo por su posterioridad á aquella ley, sino porque además debe ser esta obedecida sean cuales fuesen las leyes que la contradigan, debe ser preferida para la correccion del caso indicado, (artículo 126.)

Por el artículo 21 de dicha constitucion, los gefes políticos en último caso podrían imponer hasta un mes de arresto si hubiera ley constitucional que así lo dispusiera; pero nunca, ni aun los gobiernos de los Estados pueden imponer la de obras públicas, cuya pena trascendental corresponde exclusivamente á la autoridad judicial, en la forma que determinan las leyes reglamentarias y penales de los Estados.

Hay pues en este caso infraccion de las garantías que acuerdan al hombre los artículos 16 y 21 del código federal, en las penas señaladas al ciudadano Manuel Diaz estando comprendido en la fraccion 1ª, artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Por tanto el fiscal pide:

Que el juzgado federal amparo y proteja al referido ciudadano, contra la providencia del jefe político que lo condena á quince días de obras públicas, disponiendo que esa pena deje de tener lugar, al menos en los seis días que faltan para cumplirla.—
P. Rosado.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

República mexicana, juzgado de Distrito de Tabasco.

San Juan Bautista, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: el ocurso en que el C. Manuel A. Diaz, solicita el amparo federal contra la providencia del C. jefe político del centro que lo condena á quince días de obras públicas, con violacion, segun dice de los artículos 19 y 21 de la Constitucion nacional: el informe de la autoridad causante, segun el cual el quejoso fué primeramente condenado á ocho días de obras públicas por haber maltratado de obra en lugar público á otro individuo, y que como al notificarse esta condena hubiese prorumpido en ofensas contra la propia autoridad, ésta hubo á bien imponerle la *otra pena* de las que permite el art. 20 de la ley de 13 de Noviembre de 1852, aunque en el principio del mismo informe ya expresa que la segunda condena fué de quince días de obras públicas: el segundo informe del mismo funcionario, en que no hace mas que remitirse al primero: los pedimentos fiscales y todo lo demas que de autos consta. Prescindiendo de la cuestion que promueve el C. fiscal sobre si la pena de obras públicas ha de tenerse ó no como rigurosamente judicial, en virtud de no estar comprendida literalmente entre las que el art. 21 del código fundamental permite imponer á la autoridad política ó administrativa, por no ser del caso sentar un juicio resolutivo sobre este punto, y tomando solo en consideracion,

Primero; que no estando reglamentado, y siendo dudoso que pueda serlo generalmente el citado artículo, no puede haber duda en que las autoridades políticas de los Estados tienen que atenerse á las leyes de su administracion interior en lo que no pugnen con los principios constitucionales, pues tampoco es admisible que carezcan de toda facultad penal.

Segundo; que la que en este Estado se halla en observancia, es la reglamentaria para el gobierno interior, de 12 de Noviembre de 1852.

Tercero; que ésta en su art. 20 permite á los gefes políticos imponer gubernativamente hasta cincuenta pesos de multa, ocho dias de obras públicas ó doble tiempo de arresto á los que los desobedezcan ó falten al respeto, ó de cualquier modo turben la tranquilidad pública.

Cuarto; que si bien en el informe oficial referido se pretende hacer aparecer que en la condena de quince dias de obras públicas, se resúmen dos penas impuestas, por dos delitos distintos, esta explicacion no es admisible,

Primero; porque habiéndose hecho la imposicion de la pena en un solo acto, ella nunca debió exceder del maximum permitido por la ley;

Segundo; porque la circunstancia de que el quejoso se haya descomedido en palabras para con la autoridad al intimársele la primitiva condena, no constituye un delito aparte, sino una circunstancia agravante del que se juzgaba.

Quinto; que por lo mismo es visto que dicha autoridad faltó al art. 20 citado imponiendo en un solo fallo la pena de obras públicas por siete dias mas de lo que él permite, y como conforme á esta ley deben las autoridades políticas del Estado, usar de la facultad que les asigna el art. 21 constitucional, consiguiente es que este ha sido violado contra la persona del promovente, á quien favorece por lo tanto la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enc-

ro de 1869: por tales consideraciones y fundamento legal, el tribunal falla:

Primero: la justicia de la Union ampara y protege al C. Manuel Diaz, contra la providencia del C. gefe político del centro que lo condenó á quince dias de obras públicas, entendiéndose el amparo en cuanto á los siete dias en que esta imposicion excedió del maximum de la ley:

Segundo; dése cuenta á la superioridad, conforme al art. 13 de la ley de la materia. Lo proveyó y firmó el C. Lic. Limbano Correa juez de Distrito del Estado por ante mí su escribano que doy fé.—*Limbano Correa.*—Ante mí.—*Gabriel Sosa.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre primero de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Tabasco, por el C. Manuel A. Diaz, contra el gefe político del centro que le impuso quince dias de obras públicas, alegando que con este hecho se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 19, y 21, de la constitucion de 1857. Vistas las constancias de autos, y

Considerando: que aunque la gefatura política pudo en la órbita de sus atribuciones imponer al quejoso quince dias de reclusion por las faltas cometidas contra la policía y su autoridad ajustándose á las prevenciones del artículo 20 de la ley del 2 de Noviembre de 1852, violó no obstante, el artículo 21 de la constitucion de la República, al elegir el extremo de ese artículo que se refiere á las obras públicas, porque dicha pena no puede imponerse sino por las autoridades judiciales, con tales fundamentos se declara: que se reforma el fallo pronunciado por el juzgado de Distrito de Tabasco en los términos siguientes. La justicia de la Union ampara y protege al peticio-

nario en lo relativo á la condenacion á las obras públicas y no en lo que se refiere á la reclusion dentro de los términos permitidos por la constitucion federal y ley particular de ese Estado.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de donde proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. *S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre siete de mil ochocientos setenta y uno.
—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Pachuca por el C. Adolfo Mercheyer, contra el C. Lic. Pablo Islas que funciona como juez conciliador de esa ciudad, el cual se declaró competente para conocer de la demanda que en juicio verbal sobre pesos se ha intentado ante él.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal, en el juicio de amparo de garantías promovido por D. Adolfo Mercheyer contra el Lic. Pablo Islas juez conciliador de esta ciudad, supuesto en estado de alegar de buena prueba, dico: que

las pruebas que tiene rendidas esta promotoria han cumplido con su objeto y por lo mismo son recusables. Muestra evidente de ello es, que no ha podido destruirlas el C. juez en el informe que dió, ni aun con la copia de su nombramiento expedido en 3 de Junio del corriente año y la razon es clara.

La eleccion del citado juez conciliador fué hecha y declarada por la asamblea municipal, que conforme al decreto núm. 99 no debia funcionar; ademas, si era sabida por todos la nulidad de sus actos ¿cómo ha creído el C. Lic. Pablo Islas que podia conocer en una demanda para la cual carecia de jurisdiccion? Desde el momento en que D. Adolfo Mercheyer hizo su objecion, debió el mencionado C. Islas haberse inhibido del conocimiento del negocio, dejando á los litigantes á salvo sus derechos; pero al haberse declarado con jurisdiccion, infringió el art. 14 de la Constitucion general.

Podria el promotor ocuparse mas detonadamente de refutar las pruebas en que el C. Lic. Pablo Islas apoya su derecho, mas son de por sí tan débiles que no cree conveniente distraer la atencion del juzgado, supuesto que con solo pasar la vista por ellas se palpa el ataque á las garantías individuales.

Por lo expuesto, el ministerio fiscal concluye pidiendo se ampare y proteja por la justicia federal al expresado Adolfo Mercheyer que lo ha solicitado, contra el acto del C. juez 1º conciliador que le ha violado en su persona las garantías ya mencionadas.

Pachuca, Noviembre veinte de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Macedonio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Noviembre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.